

Lucrecia Lozano y Raúl Benítez Manaut

De la contención pasiva a la guerra de baja intensidad en Nicaragua

El presente trabajo, escrito al calor del séptimo aniversario del triunfo sandinista en Nicaragua, pretende recuperar los principales lineamientos que han guiado la política de Estados Unidos frente al ascenso y la consolidación de la revolución. Se aborda la forma que adopta el ambiguo discurso del presidente James Carter, que nunca logra superar el dilema de la política de los derechos humanos y su relación con la preservación de la seguridad estadounidense, y cómo al subir Ronald Reagan a la presidencia inaugura su política hacia Nicaragua bajo los estrechos lineamientos del conflicto este-oeste. A partir de un discurso eminentemente ideológico, se arma un complejo rompecabezas que quiere evitar intervenir o negociar, opciones no deseadas por el gobierno Reagan. La primera, para no asumir sus elevados costos; la segunda, porque se la considera una derrota, y la potencia militar y económica número uno del planeta no admite derrotas, mucho menos cuando percibe que se configuran frente al avance de la Unión Soviética en el mundo. Por ello la política estadounidense frente a la revolución nicaragüense es de contención activa, implementada a través de fuerzas militares —la contrarrevolución— que buscan la reversión del proceso sandinista ("Doctrina Reagan"), e implica una guerra de bajo costo para Estados Unidos: una guerra de baja intensidad.

1. DE CARTER A REAGAN. 1979-1983. LA CONTENCIÓN

El triunfo de la revolución popular sandinista en Nicaragua el 19 de julio de 1979, y el desarrollo y la profundización de la crisis centroamericana, obligaron al gobierno de James Carter a efectuar un balance y redefinir su política hacia el área, considerada hasta ese momento —al igual que la zona del Caribe— como una región con problemas y situaciones críticas de "bajo perfil", fácilmente manejables para Washington.

A partir de los años sesenta y en el marco de la doctrina de seguridad nacional desarrollada por Estados Unidos en esa década, Nicaragua fue considerada dentro de la política

hemisférica norteamericana como una pieza clave para la estabilidad del área centroamericana.¹

La apreciación que dominó en los círculos gubernamentales estadounidenses hasta unos meses antes de la caída de la dictadura, era que el gobierno de Somoza constituía uno de los regímenes más firmes y estables de la región.

La profundización de la crisis del régimen, a partir de octubre de 1977, y la generalización de la lucha popular insurreccional, después de septiembre de 1978, encontraron al recién estrenado gobierno de James Carter carente de una interpretación coherente de la crisis nicaragüense y sin respuestas políticas adecuadas a la misma.

Durante toda la crisis revolucionaria y hasta el momento del triunfo sandinista, la política de Estados Unidos hacia Nicaragua se distinguió por tener un carácter errático y contradictorio. Prácticamente hasta el momento de su derrumbe, Somoza fue apuntalado por la Casa Blanca, la que no pudo contar nunca —luego del asesinato del líder moderado Pedro Joaquín Chamorro, el 10 de enero de 1978— con una figura de la oposición burguesa que sirviera de relevo a la dictadura y aglutinara eficazmente a las fuerzas que pugnaban por impedir el desenlace revolucionario de la crisis.²

A fin de recuperar la iniciativa político-ideológica dentro de Estados Unidos y en el plano internacional —fuertemente desgastada por la guerra de Vietnam—, el gobierno de Carter impulsó una doble línea política: a) la defensa de los derechos humanos, y b) la promoción de los procesos de democratización en América Latina para garantizar la estabilidad regional, apoyando a fuerzas políticas moderadas en la constitución de gobiernos civiles.

Aunque Nicaragua era uno de los dieciocho países integrantes de la "Canasta Christopher" que el Departamento de Estado había seleccionado para aplicar la política de derechos humanos, hasta 1978, y a diferencia de otros países de la región, había sido objeto de un trato preferencial por parte de Washington. Por ejemplo, contra Guatemala se habían aplicado presiones y sanciones económicas y políticas debido a las reiteradas acusaciones de violaciones de los derechos humanos por parte de los gobiernos militares del país.

Tras la sublevación de septiembre de 1978, Estados Unidos suspendió la ayuda económica y militar correspondiente al año fiscal 1979 al gobierno nicaragüense —aunque no se frenaron los préstamos a través de canales privados y multilaterales— y emprendió una política tendiente a mediatizar el conflicto, procurando que Somoza asumiera una posición

1 Jorge Lawton, "Crisis de la hegemonía. La política de Carter hacia Nicaragua: 1977-1979", en CIDE, *Estados Unidos. Perspectiva Latinoamericana. Cuadernos Semestrales*, n. 6, segundo semestre de 1979, México
2 Lucretia Lozano, *De Sandino al triunfo de la revolución*, ed. Siglo XXI, México, 1985, segunda parte, capítulo n, pp. 134-268.

conciliadora frente a la oposición, representada por la burguesía antisomocista organizada en el FAO (Frente Amplio Opositor).

Se trataba de impulsar una solución pacífica y democrática a través de la negociación entre estos sectores y la dictadura, a fin de cerrar el paso a la salida popular y revolucionaria representada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La inoperancia de esta estrategia a nivel interno —dada la intransigencia de Somoza a dialogar— llevó a la Casa Blanca a optar por la mediación multilateral, pidiendo la intervención de la OEA para forzar a Somoza a negociar con la oposición. El fracaso de esta mediación fue rotundo, en la medida en que Somoza nunca manifestó una voluntad real de sortear la crisis sacrificando alguna cuota de poder y privilegio. Pareciera que su lógica, reforzada por 45 años de dominio familiar dinástico en el país, era la del "todo o nada".

Este descalabro se repetiría meses más tarde, el 21 de junio de 1979, durante la Reunión de Consulta de Ministros Exteriores de la OEA, cuando la propuesta de Estados Unidos de crear una fuerza interamericana de paz que interviniera en Nicaragua fue rechazada por la mayoría de los países latinoamericanos, plegándose finalmente Washington a la voluntad de la mayoría.³

Hacia junio de 1979, las consecuencias de la crisis nicaragüense para la política de Estados Unidos en la región eran difícilmente predecibles, aunque en algunos sectores políticos de aquel país prevalecía la tesis de que el desmoronamiento del régimen somocista provocaría en Centroamérica un "efecto de dominó", minando las bases de sustentación de los regímenes aliados en el área.⁴

El obligado reajuste de la política exterior norteamericana en la región, tras el triunfo de la revolución sandinista en julio de 1979, subrayaría los errores cometidos en la etapa final de la lucha:

- a) El innecesario respaldo a Somoza, sobre todo después de septiembre de 1978, cuando su derrota se perfilaba como inevitable ;
- b) La torpeza y las contradicciones de Estados Unidos durante la reunión de la OEA el 21 de junio de 1979;
- c) El no haber apoyado a tiempo y decididamente a la oposición burguesa moderada

3 Ver Jorge G. Castañeda, "¿Qué hacemos en Centroamérica?", *Nexos*, n. 94, México, octubre de 1985. En este artículo se sostiene que fue México el que impidió que mandara la OEA una "fuerza interamericana de paz" para detener el avance del Frente Sandinista de Liberación Nacional; p. 21

4 Margaret Daily Hayes, "United States Interests in Central America in Global Perspective", en Richard Feinberg (comp.), *Central America. International Dimensions of the Crisis*, Holmes & Meier, Nueva York, 1982

La nueva lógica de la política estadounidense a partir de la segunda mitad de 1979, una vez que el gobierno y los círculos políticos se sensibilizaron en torno a la importancia adquirida por las subregiones de Centroamérica y el Caribe y al impacto generado por el desarrollo de situaciones críticas en ellas, se distinguió por el esfuerzo de integrar los aspectos estratégicos y de seguridad militar al manejo de las relaciones propiamente diplomáticas y al intercambio económico. Se trataba de definir y asegurar los instrumentos básicos que sirvieran a la estabilización económica y política de esas zonas, a fin de garantizar los intereses norteamericanos. Dentro de este esquema, las condiciones de carácter militar fueron adquiriendo mayor peso en el enfoque regional.

Entre los puntos más relevantes de esta nueva estrategia destacaban:

- Vincular el fortalecimiento del "Grupo del Caribe para la Cooperación en el Desarrollo Económico" —auspiciado por el Banco Mundial— con el reforzamiento de las bases militares y la presencia armada en esa región, así como fortalecer los programas de ayuda económica para el año fiscal 1980/81.
- Coadministrar estas políticas subregionales con países emergentes de América Latina, como México, Venezuela, etcétera, a fin de comprometerlos en ellas, particularmente en el "curso democrático" del proceso nicaragüense.
- Intensificar la coordinación con aquellos organismos financieros internacionales en los que Estados Unidos tiene una influencia predominante (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco para el Desarrollo de El Caribe, etcétera), a fin de que sirvieran estrechamente a los objetivos del gobierno estadounidense y se constituyeran en elementos articulados a la estrategia de estímulos y sanciones definida por Washington.
- Apoyar los intereses del capital privado ubicado en esas áreas.

Si bajo Carter, tras la experiencia nicaragüense y los sucesos de Granada —que llevan a Maurice Bishop y su partido Nueva Joya al poder en marzo de 1979—, se dan los primeros pasos para reformular la tradicional política de Estados Unidos hacia Centroamérica y el Caribe, con la llegada del republicano Ronald Reagan a la Casa Blanca, en enero de 1981, esta política adquiere una definición ideológica plenamente acabada y se van estructurando los mecanismos para frenar la espiral revolucionaria en Centroamérica y evitar el alineamiento de Nicaragua con el "bloque comunista".

Se trataba de recuperar la hegemonía de Estados Unidos perdida durante los años de la distensión y contener y enfrentar el "expansionismo soviético", exitoso en las últimas décadas

en algunas regiones del Tercer Mundo, en donde había conquistado posiciones y estaba deteriorando aceleradamente el balance del poderío norteamericano. La recuperación y reestructuración del liderazgo de Estados Unidos debía afirmarse mediante una voluntad política de firmeza que daría nuevamente cohesión a la alianza occidental. Contener y enfrentar el "avance del comunismo", y hacerlo desde una posición de fuerza, serán los componentes fundamentales de la política exterior global que despliega el gobierno Reagan.

La región centroamericana, pues, serviría de "test" para la aplicación de esta estrategia global, que asignaba al Tercer Mundo el papel de área clave en la geopolítica, mundial. Se contaba, además, con la ventaja de que la región se localizaba en un hemisferio considerado por Estados Unidos como esfera de acción natural de sus intereses, lo que en principio implicaba menores costos relativos en la implementación de esta política, y se suponía que la respuesta soviética sería más remota que si se tratase de zonas como el Medio Oriente o el sudeste asiático.

La actuación en situaciones críticas de América Central y el Caribe permitiría al nuevo gobierno demostrar a nivel internacional su voluntad de liderazgo y su renovada firmeza.

En el marco de esta interpretación global la administración Reagan fue "puliendo" su política hacia Centroamérica, particularmente con respecto a El Salvador y Nicaragua, definiendo líneas, descartando soluciones poco efectivas y postulando nuevas opciones y alternativas que condujeron, de una perspectiva inicial triunfalista e "inmediata", a una apreciación más realista y a mediano plazo.

Ya en 1980, en plena campaña electoral, los principales estrategas de Reagan elaboraron el *Documento de Santa Fe*, que se convertiría en la guía y matriz ideológica de la política de Estados Unidos hacia la región centroamericana, y en el cual no sólo se esboza la doctrina de la "contención al comunismo", sino que se perfila la concepción de que los conflictos en la subregión se insertan en la confrontación entre el este y el oeste.⁵

Hacia 1981, recién asumida la presidencia, el gobierno de Reagan pone en marcha los primeros pasos de su estrategia para el área, entre los que destacan:

- a) Reforzar la línea dura hacia los movimientos revolucionarios y los países de Centroamérica y el Caribe caracterizados como "marxistas": Cuba, Granada y Nicaragua.⁶ Consecuencia de ello fueron la realización de maniobras militares en las

5 Ver Documento de Santa Fe: "Las relaciones interamericanas: escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos", en CIDE, *Estados Unidos. Perspectiva Latinoamericana. Cuadernos Semestrales*, n. 9, primer semestre de 1981, México

6 Lilia Bermúdez y Antonio Cavalla, *Estrategia de Reagan hacia la revolución centroamericana*, ed.

zonas de Vieques —Puerto Rico—, Guantánamo —Cuba— y Golfo de Fonseca —con fronteras con Honduras, El Salvador y Nicaragua—;⁷ la intensificación del bloqueo contra Cuba; el despliegue de acciones de desestabilización contra Granada y la escalada militar en El Salvador, que se concretiza con la reanudación de la ayuda militar y la llegada del grupo de asesores militares a la embajada de Estados Unidos, mismos que paulatinamente asumirán el control y la dirección de la guerra de contrainsurgencia en ese país!⁸

- b) Dar prioridad a las subregiones del Caribe y Centroamérica en el otorgamiento de asistencia económica y de seguridad.
- c) Identificar y dar apoyo a los aliados internos.
- d) Promover el desarrollo del capital privado en la zona.⁹

Dentro de esta alternativa, la crisis salvadoreña pasó a ser considerada como el "caso prueba" de la aplicación de la nueva política para América Latina, mientras que la resolución del problema que representaba la revolución sandinista se dejó para un momento posterior. A principios de 1981, los ideólogos de esta estrategia estaban plenamente convencidos de que el gobierno de José Napoleón Duarte —cuya primera gestión presidencial tiene lugar de marzo de 1980 a marzo de 1982— estaba en condiciones de infringir una derrota a las fuerzas guerrilleras del FMLN —Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional— mediante la asistencia y la asesoría económica y militar de Estados Unidos.¹⁰

Sin embargo, los avances de la insurgencia salvadoreña y la reafirmación de la revolución nicaragüense llevaron a la Casa Blanca a redefinir, a partir de 1982, su política hacia América Central y a acentuar la línea dura sostenida hasta ese momento frente a la crisis

Nuestro Tiempo, México, 1982.

7 La maniobra militar más importante que ha realizado Estados Unidos en América Latina desde la posguerra es la llamada *Ocean Venture 81*. Se llevó a cabo del 1º de agosto al 15 de octubre de 1981 en la isla de Vieques, Puerto Rico. Fue un ejercicio naval y aéreo de invasión e incluyó más de mil aviones, 240 barcos y 120 mil efectivos. Además, participaron contingentes de la OTAN, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Ver Raúl Benítez Manaut y Ricardo Córdova, "El Informe Kissinger y las maniobras militares de Estados Unidos en Centroamérica: preludio de la intervención militar directa", en Instituto de Investigaciones Sociales, *Revista Mexicana de Sociología*, vol. XLVI, n. 3, julio-septiembre de 1984, UNAM, México, p. 82.

8 Los primeros asesores de Estados Unidos a El Salvador llegan en mayo de 1980. En agosto de 1981, el *U.S. Military Group* comprende a 56 militares de alto rango que se ocupan del entrenamiento del ejército y la dirección de la guerra de contrainsurgencia. Ver Amon Hadar, *The United States and El Salvador: Political and Military Involvement*, US-El Salvador Research and Information Center, Berkeley, Cal., 1981.

9 Dicha asistencia se trató de coordinar a través de la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe, propuesta por el gobierno Reagan en 1981. Ver: *Fact Sheet on the Caribbean Initiative*, Washington, D.C., U.S. Trade Representative, 22 de febrero de 1982.

10 Center for International Policy, *Aid Memo, Total Aid Package for El Salvador*, Washington, abril de 1981

regional, descartando cualquier solución que involucrase negociación alguna.

Es así que a partir de 1982 y frente al fracaso de la opción aplicada en 1981, Estados Unidos promueve la regionalización del conflicto, intentando involucrar en él, política y militarmente, a los principales gobiernos latinoamericanos bajo el argumento de que la crisis es un asunto de seguridad que compete a todos en la medida en que se trata de un enfrentamiento de intereses entre este y oeste y en el cual la Unión Soviética actúa en el hemisferio a través de sus agentes subregionales —Cuba, Granada y Nicaragua—, los cuales fomentan la subversión.

Esta opción de *regionalización amplia* del conflicto queda rota con el estallido de la guerra de Las Malvinas, que obliga a países como Argentina y Venezuela —principales soportes de la política norteamericana en Centroamérica en ese momento— a redefinir sus relaciones con Estados Unidos, y a la Casa Blanca a revalorar su política global hacia América Latina.

A partir del segundo trimestre de 1982, y con mayor nitidez en 1983, la opción que se impulsa es la de la *regionalización restringida* de la crisis: la "centroamericanización del conflicto". En ella desaparecen los espacios nacionales y se colocan en un mismo plano los casos críticos —Nicaragua y El Salvador—, proponiéndose una solución similar y simultánea a los problemas.

La "centroamericanización del conflicto" trae aparejado el incremento de la ayuda y la asesoría de los militares a los regímenes amigos —Guatemala, el Salvador, Honduras y Costa Rica— y la idea de establecer una estrecha colaboración entre sus gobiernos y las fuerzas armadas.¹¹ consecuencia de esta estrategia fue la creación, a principios de 1982, de la fugaz comunidad democrática centroamericana, integrada por el Salvador, Honduras y Costa Rica países con gobiernos emanados de procesos electorales, y la constitución en octubre de ese mismo año, del llamado foro Pro paz y Democracia, que dejó fuera a Nicaragua.¹² Reflejo de de esta política fueron, también, los reiterados esfuerzos por revivir el CONDECA y promover la alianza militar del llamado "Triangulo de Hierro", y que incluía a los ejércitos de Guatemala, el Salvador y Honduras.

Resultado de la estrategia de "centroamericanización del conflicto" fue, igualmente, la

11 el paso de la "latinoamericanización" a la "centroamericanización" del conflicto es abordado con gran detalle por Luis Maira. Ver Luis Maira, *la política de Reagan y la crisis en Centroamérica*, EDUCA, San José, 1982.

12 el principal responsable de la política de Reagan hacia Centroamérica fue el entonces secretario del estado para asuntos interamericanos, Thomas Enders. él fue el que, a raíz de la promulgación del comunicado Franco-Mexicano sobre el reconocimiento de la FMLN-FDR de El Salvador como "Fuerza política representativa", en agosto de 1981 busco neutralizar la diplomacia mexicana creando foros "alternativos", como la Comunidad Democrática y el foro Pro Paz Democracia.

intensificación de las agresiones contra los países considerados enemigos mediante las ejecuciones de acciones en cubierta, las desestabilización y las presiones militares — en Nicaragua, por ejemplo, se fortalece el apoyo de los grupos el respaldo a los grupos contrarrevoluciones y en Cuba se incrementan los vuelos de reconocimientos sobre el territorios de la isla—, así como la aplicación de sanciones comerciales, diplomáticas, etcétera.

Esta opción excluye la viabilidad de la negociaciones para sortear la crisis, y aunque no descarta el uso de la fuerza militar —la intervención militar directa—, maneja esta variable con suma cautela debido a los riesgos y costos que implica tanto dentro de Estados Unidos como en el contexto internacional.¹³

A la par, y aprovechando las condiciones favorables para la intervención durante octubre de 1983, Estados Unidos decide invadir la pequeña isla de Granada, en el Caribe, a fin de reforzar el liderazgo y proyectar al mundo la imagen de que sus discursos anticomunista tiene concreción real.¹⁴

En este intercambio de la estrategia y ante la imposibilidad de resolver rápidamente la crisis salvadoreña, Honduras pasa a jugar un papel clave en la aplicación de la política de Washington en la región.¹⁵ Para Nicaragua, los acontecimiento de Granada significan una llamada de alerta que despiertan la inquietud ante la posible ejecución de actos similares contra su territorio.

Dentro de la política norteamericana es notable el acento puesto en la región cuando se observan los montos de la ayuda económica y militar proporcionada en Centroamérica a fin de fortalecer la estrategia militar de contención del conflicto. El incremento de los montos a los países aliados de Estados Unidos es significativo.¹⁶ A Nicaragua se le suspendió toda asistencia en el año de 1980. De 1946 a 1979 la asistencia total al conjunto de la región sumo 1837 millones de dólares, mientras que de 1980 a 1984 fue de 2561.4. Es decir que en cinco años la asistencia ha sido superior a toda la ayuda otorgada en los 33 años anteriores. Esta tendencia ascendente del involucramiento se incremento notoriamente en 1985, cuando al

13 desde 1979, Estados Unidos creó las llamadas Fuerzas de Despliegue Rápido, para superar el empantanamiento militar provocado por la modalidad de intervención experimental en Vietnam. dichas fuerzas tienen destacamentos especiales para utilizarse en la Cuenca del Caribe. ver Antonio Cavalla, *Estrategia militar contra el tercer Mundo: Intervención militar masiva*, tesis de maestría, FCP y s, UNAM, 1983.

14 Gregorio Salser, *Honduras República alquilada*, Mex-sur, México, 1983

15 Gregorio Salser, Granada primer ejército ‘en vivo de la Rapid Deployet Force’ *El día*, 31 de octubre de 1983.

16 las cifras presentadas a continuación han sido tomadas de fuentes oficiales norteamericanas, principalmente de los departamentos de Estado y Defensa. Vert Richar Alan White, *The Morass. United States Intervention in Central America*, Harper & Row, Nueva York, 1984 pp. 234-41; y Tom Barry y Deb Preush, *the Central America Fact Book*, Grove Press, Nueva York, 1986 pp. 29-41.

ayuda alcanza los 1411.5 millones de dólares, monto que solo comprende al aprograma de asistencia militar (Military Assitence Program), el program de venta militares al exterior (Foreign Military Sales), el programa internacional de entrenamiento y educación militar (International Military and Education Training), la Asistencia para el desarrollo (Development Assietence), la ayuda para alimentos conocida como PL480y los Fondos de Ayuda Económica (Economic Support Funds).

En este paquete de asietencia no se incluye la proporcionada por países aliados de Estados Unidos como Israle, Venezuela, Argentina, Chile, Brazil y otros, que han otorgado importantes donaciones y asistencia militar, así como tampoco la de organismos internacionales u organismos privados que han entregado a los *contras* mucha más asistencia que la oficial.¹⁷

En la ayuda oficial de Estados Unidos el destinatario principal es el gobierno salvadoreño, que ha recibido, de 1981 a 1985, 1 739 millones de dólares, los cuales se dirigieron en un 74% al esfuerzo bélico. También Honduras es un receptor privilegiado, pues ha recibido, de 1980 a 1985, 803.7 millones de dólares. Otra apreciación importante es el creciente hincapié en la asistencia militar, en detrimento de la ayuda económica. Al respecto, en 1980, durante el gobierno Carter, el 74% de la ayuda era de carácter económico y el 26% militar. En 1985, el 75% de la ayuda fue militar y el 25% económico. Esta tendencia se agudiza en los programas para 1985 y 1986. En 1985, del total de la ayuda otorgada a la región, de 1 411.5 millones de dólares, 1 184.9 fueron para ayuda militar (83%) mientras que sólo 226.6 millones de dólares (17%) fueron ayuda económica. En 1986, de la asistencia programada de 1 005.2 millones de dólares, 802.2 millones se destinarían para ayuda militar (80%) y 203 para ayuda económica.

2. LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD. 1984-1986

Esta fase de la política de Reagan se caracteriza por el conocimiento tácito de la fortaleza del régimen de Managua. Se diluye el discurso de la intervención militar directa, que llegó a su clímax en octubre de 1983 con la invasión a Granada, aunque la discusión y el tono agresivo se mantienen a través de la realización de ejercicios militares en Honduras y en las aguas del Pacífico y el mar Caribe. El elemento clave que determina esta nueva fase de

¹⁷ El gobierno sandinista sostiene que la ayuda de grupos privados a los *contras* es muy superior a la otorgada oficialmente. Se habla de mil millones de dólares, aunque esta cifra es muy difícil de comprobar. Ver: Gobierno de Nicaragua, *La derrota de la Contrarrevolución. Datos Básicos 1981-1985*, Managua, 1986.

política es el *Informe Kissinger*, aparecido en enero de 1984.¹⁸ Por primera vez el gobierno Reagan logra tener un documento que, además de ser la expresión de un sector muy amplio de la compleja red que compone el sistema político, el gobierno y el Congreso —por tener un carácter bipartidista—, permite tener una percepción integral y coherente de la crisis en el conjunto de América Central. Además incluye sus famosas recomendaciones, que serán integradas como guía de la política de Estados Unidos a la región.

Frente a Nicaragua, ¿cuál es la premisa ideológica fundamental que encierra el *Informe Kissinger*?: el asumir, como una necesidad, el paso de la llamada contención pasiva a la contención activa. Contención pasiva es la que se supone imperaba en el pensamiento estratégico de Estados Unidos en relación con el llamado "avance del comunismo en el Tercer Mundo". Dicha noción, también conocida como "contención estática", pertenece a la "era de la distensión" y es parte de la "Doctrina Nixon", que frente a la Unión Soviética establece la necesidad de firmar los acuerdos de limitación de armas (SALT) y respecto al Tercer Mundo trata de evitar la intervención militar directa por los problemas militares, políticos e internacionales que representa y que fueron puestos en evidencia con la salida de las tropas de Vietnam. La implementación de esta política se plasma directamente en el fortalecimiento de los ejércitos de los países considerados aliados, a fin de que sobre ellos recaiga el esfuerzo militar de contención. El ejemplo más claro de la aplicación de estos principios fue el golpe de estado en Chile en septiembre de 1973, donde el propio ejército chileno fue capaz de contener —según la interpretación de la "Doctrina Nixon"— el avance del comunismo. Dado el rotundo fracaso estadounidense en Vietnam, el gobierno de Carter se encuentra sin una política coherente frente al ascenso de los movimientos de liberación en el Tercer Mundo. Como ya lo señalamos, la lucha sandinista toma por sorpresa a los estrategias de su gobierno, simultáneamente al derrocamiento del Cha en Irán.

La nueva estrategia de contención activa plasmada en el *Informe Kissinger* proporciona, en primer lugar, una política nacional unificada, en segundo término, una coherencia ideológica, y, por último, permite a Estados Unidos pasar a la ofensiva militar, diplomática y política frente a Nicaragua —y también frente al FMLN salvadoreño, que goza en estos momentos de gran credibilidad internacional. Es preciso señalar que en el proyecto neoconservador de Reagan, la política de contención de países considerados "enemigos" en el Tercer Mundo pertenece a un proyecto global, a cuya cabeza está la

18 Gregorio Selser (traducción, introducción, notas críticas, comentarios y epílogo), *Informe Kissinger contra Centroamérica*, El Día en Libros, México, 1984. Ver en especial las "recomendaciones" de seguridad, incorporadas en el capítulo vi, pp. 219-58. Ver también Raúl Benítez Manaut y Ricardo Córdova, "El Informe Kissinger...", cit

Iniciativa de Defensa Estratégica, mejor conocida como "Guerra de las Galaxias".

Por ello la agresión a Nicaragua tiene una lógica en el pensamiento actual político y militar norteamericano. La estrategia elegida, que consiste en un permanente cerco y bloqueo económico —que llegó a uno de sus momentos más altos con el embargo comercial de mayo de 1985— y en la creciente agresión militar contrarrevolucionaria, se asemeja a las acciones de desestabilización desarrolladas en Angola por el Ejército de Sudáfrica y las fuerzas contrarrevolucionarias, a cuya cabeza se encuentra Jonas Savimbi. Esta política de reversión de procesos no consolidados (*rollback*), se va a popularizar como "Doctrina Reagan"¹⁹

La contención activa del sandinismo en Nicaragua, ya plasmada en el *Informe Kissinger* y legitimada dentro de Estados Unidos como la acción que, sin costos económicos, políticos y militares, se ha implementado a través de la contrarrevolución, se encuadra en la nueva doctrina militar conocida como Guerra de Baja Intensidad. Este concepto, hermano menor de la Iniciativa de Defensa Estratégica, surge como la opción coherente de contención activa en el Tercer Mundo; está emparentado con las "pequeñas guerras sucias" contra países enemigos y su aplicación táctica operativa se lleva a cabo, principalmente, mediante las llamadas Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).²⁰ La nueva doctrina incluye también la noción de "contraterrorismo", que se basa en acciones terroristas encubiertas, dado que se supone que una de las armas fundamentales del "enemigo" son las acciones terroristas contra objetivos norteamericanos.²¹ En esta lógica se inscriben numerosos atentados contra la infraestructura nicaragüense, como la destrucción de los depósitos de combustible del Puerto de Corinto en octubre de 1983 y el minado de los puertos durante 1984.²²

La doctrina de la Guerra de Baja Intensidad se convierte en oficial al momento de asumir Reagan el segundo periodo de la presidencia de su país, en enero de 1985.²³

Descarta prácticamente, excepto que sea una necesidad inevitable, la intervención militar,

19 John D. Waghelstein, "Post-Vietnam Counterinsurgency Doctrine", *Military Review*, Fort Leavenworth, Kansas, mayo de 1985

20 "America's Secret Soldiers: The Buildup of U.S. Special Operations Forces", *The Defense Monitor*, Center for Defense Information, Washington, D. C., 1985

21 Varios, *Hydra of Carnage. International Linkages of Terrorism*, Lexington Books, Massachusetts, 1986.

22 *The Mining of Nicaraguan Ports and Harbors*, Hearing and Markup before the Committee on Foreign Affairs House of Representatives, Ninety-eight Congress, Second Session, 11 de abril de 1984, USGPO, Wash., 1984.

23 Los principales elementos doctrinarios de la Guerra de Baja Intensidad se encuentran en Sam Sarkesian y William Scully (comps.), *U. S. Policy and Low Intensity Conflict. Potentials for Military Struggles in the 1980's*, SIPRI, Transaction Books, Nueva York, 1981; y Harry Summer, Colonel of Infantry, *On Strategy. A Critical Analysis of the Vietnam War*, Dell Publishing Co., Nueva York, 1982. La oficialización del discurso de la Guerra de Baja Intensidad se puede apreciar en el discurso del Secretario de Estado, George P. Shultz, *Low-Intensity Warfare: The Challenge of Ambiguity*, US. Department of State, Bureau of Public Affairs, Wash.. D. C. Current Policy, n. 783, 1986.

cuyas unidades tácticas son las Fuerzas de Despliegue Rápido (FDR). Ahora bien, la guerra de bajo costo a través de las FOE es la opción de contención. Por esto, Caspar Weinberger, en su alocución en el seminario sobre Guerra de Baja Intensidad celebrado en Fort McNair, Washington, en enero de 1986, señaló que "en la respuesta a los conflictos de baja intensidad hay un lugar para el uso del poder", donde "las habilidades particulares y capacidades de apoyo que ofrecen las fuerzas armadas en la prosecución de los conflictos de baja intensidad se encuentran en las Fuerzas de Operaciones Especiales", ya que "están entrenadas para instruir a otros en su propia defensa" pues "su conocimiento de idiomas extranjeros, así como también su especialización en regiones extranjeras específicas, son elementos esenciales de sus capacidades". Además, "están familiarizadas con toda la gama de armas que se encuentran en otros países y pueden proporcionar entrenamiento en el uso de esas armas y de otros pertrechos de guerra, así como también instruir en tácticas de unidades pequeñas, reconocimiento, comunicaciones, medicinas de campaña, huida y evasión y mantenimiento y equipo"²⁴

Guerra de Baja Intensidad es sinónimo de guerra prolongada. Esta, a diferencia de las necesidades que suponía la percepción de que era posible una victoria rápida —donde la solución de contención sería fundamentalmente militar a través de las FDR—, supone también el dar credibilidad política y diplomática a este esfuerzo. Por ello, uno de los avances más notorios de Reagan es la legitimación de los grupos contrarrevolucionarios. Esta Lucha política se da principalmente dentro de Estados Unidos —Congreso y opinión pública—, con el fin de que no surja o se consolide una oposición a la nueva estrategia.²⁵

Así, el conjunto de la actual política de Estados Unidos hacia Nicaragua coincide plenamente con la definición de Guerra de Baja Intensidad, lo cual abarca: 1] la amenaza del uso de la fuerza sin combatir (disuasión a través de discursos políticos ideológicos bajo la amenaza de intervención) ; 2] el empleo de la fuerza sin combatir (la realización permanente de maniobras militares con hipótesis de guerra interventora desde 1982 en Centroamérica y el Caribe) ; y 3] el uso de la fuerza en combate (empleada contra Nicaragua a través de los contras y las FOE).

A esto hay que añadir que, bajo las anteriores consideraciones, el conjunto de grupos armados que operan a través de las fronteras de Honduras y Costa Rica son prácticamente un apéndice de las fuerzas armadas de Estados Unidos por las siguientes consideraciones :

24 Remark Prepared for Delivery by Honorable Caspar Weinberger, Secretary of Defense, at the Conference on Low-Intensity Warfare", Fort Mc Nair, Washington, D. C., 14 de enero de 1986, mimeo, Wash., D. G.

25 House of Representatives, 99 th. Congress, 2d. Session, "President's Request for Assistance for the Nicaraguan Democratic Resistance", 11 de marzo de 1986, USGPO, Wash., 1986i

1] dependen de manera total de Estados Unidos en sus necesidades logísticas, principalmente armamento, alimento y vestuario; 2] sus planteamientos políticos corresponden a los estadounidenses y se subordinan a éstos; y 3] la dirección de la guerra es ejecutada de manera total por Estados Unidos.

Otro elemento que destaca de la nueva doctrina, y que se inscribe en el esquema de recuperación de la ofensiva en la gesta contra el comunismo, es el de la *reversión* de los procesos revolucionarios considerados como no consolidados. Nicaragua es la prueba de fuego y la punta de lanza. La posibilidad de la reversión del proceso sandinista tiene su eje en la agresión militar y la desestabilización económica, incluyendo también la guerra psicológica, la ofensiva ideológica —que pasa por el debate sobre la existencia de una Iglesia popular—, el cerco diplomático, la lucha política, etcétera.

Finalmente, y para recuperar la iniciativa contra el comunismo en el Tercer Mundo, el gobierno Reagan ha adoptado como eje central de su discurso la lucha contra el terrorismo.²⁶ Aunque se centra en identificar a los numerosos grupos armados existentes en el Medio Oriente como la avanzada del terrorismo en el mundo, la única propuesta de ley antiterrorista elevada al Congreso de Estados Unidos —el 27 de septiembre de 1985— es la referente a Centroamérica: el Programa de Asistencia Policial Contraterrorista (Law Enforcement Counterterrorism Assistance Program) y el Programa de Asistencia Contraterrorista Regionalmente Reforzado (Regionally Enhanced Counterterrorism Assistance Program), ambos con un fondo de 54 millones de dólares.²⁷ La campaña antiterrorista de Reagan alcanza su clímax al identificar terrorismo con las políticas de ciertos Estados, los cuales deben ser objeto de un escarmiento.

La política de ligar a Nicaragua al llamado "terrorismo internacional", específicamente a Libia, se incrementa aceleradamente desde que Reagan declara el 2 de julio de 1985 que "Irán, Libia, Cuba, Nicaragua y Corea del Norte constituyen una confederación de Estados terroristas dirigidos por degenerados, inadaptados, locos y escuálidos delincuentes". Este discurso se concreta con el ataque aéreo a Libia en abril de 1986, tras el cual los más altos personeros del gobierno insisten en la estrecha relación existente entre la Nicaragua sandinista y el régimen del coronel Gadhafi, aludiendo directamente a la posibilidad de que el territorio de Nicaragua también pueda ser bombardeado.

Sin duda, el éxito más rotundo de la política agresiva de Reagan contra la revolución sandinista es la aprobación, en junio de 1986 por el Congreso de Estados Unidos, de 100

26 Mayor Jeffrey Wright, "Terrorism: A mode of Warfare", en *Military Review*, vol. *rxrv*, n. 10, octubre de 1984.

27 Central America Counterterrorism Act for 1986", Department of State, mimeo, Washington, D. C., 1985.

millones de dólares para la contrarrevolución. Representa un esfuerzo político de cinco años por superar el conjunto de trabas que numerosos representantes, principalmente pertenecientes al Partido Demócrata, impusieron a las políticas de Reagan en Centroamérica; en ese lapso se aprobaron incluso enmiendas como la Boland, de diciembre de 1982, que prohibía la desestabilización armada de gobiernos. Lo más importante de esta asignación presupuestal es la legitimación de los *contras* como fuerza militar y política en Estados Unidos, lo que facilita a Reagan poder prolongar su guerra de baja intensidad contra Nicaragua.

Para describir la guerra de agresión contra Nicaragua es necesario incorporar a nivel conceptual la diferencia que existe entre las nociones de Guerra de Baja Intensidad y Guerra Total. Lo que para Estados Unidos es una pequeña guerra sucia, de baja intensidad, donde no utiliza sus propias fuerzas militares y que, por tanto, puede prolongar en el tiempo sin perjuicios económicos contra un país 72 veces más pequeño (9 363 123 Km² vs. 130 649) y con una población 81 veces menor (235.2 millones de habitantes vs. 2.9), para Nicaragua es una Guerra Total, donde todos sus recursos económicos, humanos, políticos, diplomáticos y hasta culturales se destinan actualmente a la defensa, por la magnitud y los efectos de la agresión. En este enfrentamiento entre Guerra de Baja Intensidad de Estados Unidos contra Guerra Total de Defensa en Nicaragua, es completamente ilógico suponer que el pequeño país tuviera capacidad de amenazar de alguna manera la seguridad de la potencia económica y militar número uno del planeta.

A continuación presentamos la concreción de esta política militar de contención contra Nicaragua por parte de Estados Unidos, incorporando los dos aspectos centrales de la misma: a) la edificación del ejército responsable de la agresión militar: los *contras*; y b) la instalación del propio ejército de Estados Unidos en el territorio centroamericano a través de las bases militares edificadas y el personal estadounidense con carácter temporal y permanente, ubicado principalmente en Honduras. Otro elemento de esta estrategia es la realización de maniobras y ejercicios militares con hipótesis de guerra intervencionista y ejercicios de entrenamiento para enfrentar una guerra irregular.

3. EL EJÉRCITO CONTRARREVOLUCIONARIO

Al momento del triunfo sandinista, en julio de 1979, la Guardia Nacional somocista se disgregó por completo; sus tropas huyeron hacia Honduras y los mandos medios se refugiaron en Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. Sus más altos dirigentes llegaron principalmente a

Miami, bajo el abrigo de la comunidad cubana exiliada en esa ciudad. En Estados Unidos, desde 1979 se ha brindado protección política a los opositores al sandinismo, así como fomentado su unidad y organización para articular una verdadera oposición al régimen revolucionario. A finales de ese año, por ejemplo, se creó la Alianza Democrática Nicaragüense.

Durante 1980 y 1981 se consolidaron los primeros comandos contrarrevolucionarios. En esos dos años, el apoyo militar fundamental fue proporcionado por la dictadura militar argentina, y la principal retaguardia territorial se conformó en Honduras. En esta etapa, Estados Unidos buscó no involucrarse directamente en el conflicto, presionando a las fuerzas armadas de Honduras para que se responsabilizaran de tal esfuerzo. El ejército hondureño cumplió este papel de manera destacada bajo la gestión de Gustavo Álvarez Martínez, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de enero de 1982 a marzo de 1984.²⁸

Por su parte, la dictadura militar argentina envió agregados militares a Honduras para entrenar y proporcionar los primeros apoyos al naciente ejército. La salida de los asesores argentinos se dio tras la guerra de Las Malvinas, en el primer semestre de 1982, cuando el gobierno militar de ese país se sintió traicionado por Estados Unidos por el apoyo prestado a Gran Bretaña.

Al subir Reagan a la presidencia, incorporando la crisis centroamericana al espectro del conflicto este-oeste, Nicaragua fue acusada de proporcionar armas a la insurgencia salvadoreña. Se trataba de tener una justificación para articular una política contra el régimen sandinista. Para ello se divulgó el famoso "Libro Blanco", en el que se pretendía "comprobar" la asistencia sandinista al FMLN salvadoreño.²⁹ En marzo de 1981, en los Comités de Inteligencia del Congreso, se afirmó que tal apoyo era de "interés nacional" para Estados Unidos, dándose a entender que amenazaba su seguridad. En noviembre del mismo año se asignaron los primeros fondos para contribuir a la creación del ejército antinicaragüense: 19 millones de dólares para establecer una fuerza militar de quinientos hombres.

Para 1982, con el dinero estadounidense, la asistencia argentina, el territorio hondureño, los mandos formados por exguardias somocistas y una soldadesca reclutada entre indígenas y campesinos nicaragüenses refugiados en Honduras, los *contras* ya podían considerarse como un ejército en proceso de acumulación de fuerzas y consolidación. El precedente necesario fue la formación, en 1981, de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), mediante la

28 Gregorio Selser, *Honduras. República Alquilada*, op. cit., y Christopher Dickey, *With the Contras. A reporter in the wilds of Nicaragua*, Simon and Schuster, Nueva York, 1985

29 United States Department of State, *Communist Interference in El Salvador*, Special Report n. 80, Washington, D. C., 23 de febrero de 1981

fusión de la Legión 15 de Septiembre —integrada por exguardias somocistas— y la Unión Democrática Nicaragüense (UDN). La creación de la FDN fue la primera acción importante de la CIA contra Nicaragua.³⁰ Sus principales dirigentes son Enrique Bermúdez, último agregado militar de Somoza en Washington, y Aristides Sánchez, importante terrateniente somocista. A fines de 1983 se reestructuró la dirección de la FDN para darle un ropaje cívico-militar, siendo nombrado Adolfo Calero Portocarrero —exgerente de la Coca Cola Co. en Nicaragua— comandante en jefe de las fuerzas militares. Mediante la designación de Calero se pretendía imprimir a la FDN una imagen política "plural", desligándola de su pasado somocista. A pesar de ello, numerosas investigaciones han comprobado que la dirigencia militar de los *contras* está conformada en su inmensa mayoría por miembros de la fenecida Guardia Nacional. En un estudio elaborado en 1985 para el Congreso de Estados Unidos, titulado *Who are the Contras?*, se afirma que de los 48 principales líderes, 46 pertenecieron a la Guardia Nacional.³¹

El otro grupo importante que conforma la contrarrevolución nicaragüense es la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) . Su base principal de apoyo está en Costa Rica y sus principales dirigentes fueron Edén Pastora y Alfonso Robelo. ARDE nace en 1982. En 1984 la organización entra en crisis al negarse Pastora a cooperar con la FDN, mientras que Robelo conforma una alianza con ésta. Investigaciones sobre ARDE sostienen que nunca ha tenido más de dos mil combatientes, entrando en una profunda crisis financiera en 1984, cuando Estados Unidos le cortó el financiamiento por no fusionarse a FDN. En junio de 1986, seis de los siete comandantes de ARDE se unieron a la FDN, en tanto que Pastora anunció que abandonaba la lucha armada para iniciar un movimiento político contra el régimen sandinista y pedía asilo político en Costa Rica. Ya en 1985, la FDN envía estructuras militares para cubrir el flanco sur de la contrarrevolución, a la par que se crea, a mediados de ese año, la Unión Nicaragüense Opositora (UNO) en Washington, brazo político de la contrarrevolución.

A nivel de la población indígena, los *contras* han conformado grupos de oposición al sandinismo en la Costa Atlántica y la frontera con Honduras, principalmente en las riberas del río Coco. Su principal organización es Misurasata, fundada pocos meses después del triunfo,

30 Center of National Security Studies, *Congressional Action to Date in U. S. Covert Operations Against Nicaragua*, Wash., D. C., 1984

31 Esta información se basa en el documento del Central American Historical Institute, *Who's who in Nicaragua's Military Opposition*, IPDA, vol. 3, n. 24. Wash., D. C., 23 de julio de 1984. El gobierno Reagan ha tratado de demostrar que la dirigencia de la contrarrevolución tiene un carácter mucho más plural; ver United States Department of State, *Documents on the Nicaraguan Resistance: Leaders, Military Personnel and Program*, Special Report n. 142 Wash., D. C. En este documento se sostiene que los *contras* tienen 27% de su personal proveniente de la Guardia Nacional, que el 53% es de origen civil y un 20% proviene de desertiones de las filas Sandinistas.

la cual se convirtió en grupo opositor a la revolución en 1981, por iniciativa de la CIA, a través de su principal dirigente, Steadman Fagoth, exmiembro de los cuerpos de seguridad de Somoza. En enero de 1982 Fagoth declaró la guerra abierta al sandinismo. El otro dirigente de Misurasata, Brooklyn Rivera, siempre se resistió a colaborar con el FDN por sus antecedentes somocistas. Por esta razón la organización se dividió en dos en 1983, fundándose Miskitos, Sumos y Ramas (Misura). Rivera, que controla Misurasata, se incorporó a la lucha de ARDE y Fagoth, con Misura, se alió a la FDN. Por otra parte, desde 1984, se iniciaron conversaciones entre el gobierno sandinista y Rivera, cuando éste se declaró no antisandinista sino a favor de los derechos de los indígenas de la Costa Atlántica.³²

La participación de Estados Unidos en la guerra contra Nicaragua hasta fines de 1982 era completamente desconocida para la opinión pública norteamericana y mundial. Dicha intervención tuvo una forma encubierta (*covert action*) hasta que, en noviembre de 1982, el semanario *Newsweek*, perteneciente a la cadena de *The Washington Post*, descubrió los engranajes del involucramiento. En un reportaje titulado *La guerra secreta de América. Objetivo: Nicaragua*,³³ la revista denunciaba la función real de las tropas y los asesores norteamericanos en Honduras; el papel desempeñado por el embajador John Dimitri Negroponte; la participación del ejército hondureño en el sostenimiento y el apoyo de la logística de los *contras*, etcétera. La labor inicial de Estados Unidos fue la de "profesionalizar" al nuevo ejército, entrenarlo y crear las primeras bases militares y la logística para los comandos que penetrarían al territorio nicaragüense. El documento comparaba, finalmente, la intervención de Estados Unidos en Honduras con los primeros momentos de la guerra de Vietnam.

A nivel militar, las fuerzas contrarrevolucionarias utilizan la lucha guerrillera como principal forma de ataque y sus acciones se focalizan contra la infraestructura económica (por ejemplo, evitar la recolección de la cosecha de café, producto que provee de importantes divisas al país) y contra la población civil nicaragüense. Según numerosas investigaciones, la actividad de los *contras* se ha caracterizado por la masiva y sistemática violación de los derechos humanos. En 1984, un reporte del Consejo de Asuntos Hemisféricos, entidad privada con sede en Washington, los clasificaba como los mayores violadores de los derechos humanos de toda América Latina. La organización humanitaria Americas Watch and the Lawyers Committee for International Human Rights, ha testimoniado en numerosas ocasiones ante el Congreso de Estados Unidos y con pruebas concluyentes sobre la sangrienta

32 La información sobre ARDE, Misurasata y Misura fue extraída de Tom Barry and Deb Presh, *The Central America Fact Book*, cit., pp. 269-99.

33 *Newsweek*, 8 de noviembre de 1982.

forma de combate de los llamados por Reagan "combatientes de la libertad".³⁴

Los *contras* sostienen que en 1985 estaban integrados por unos 15 mil hombres. En ocasiones han hablado de 20 mil,³⁵ cuando necesitan inflar el número de sus integrantes para que se les otorgue más ayuda "humanitaria", proporcionada principalmente por agrupaciones privadas de derecha en Estados Unidos. No obstante, diversos cálculos sostienen que en el interior de Nicaragua no operan más de tres mil de sus elementos.

Las fases de la estrategia militar contrarrevolucionaria han comprendido, *a grosso modo*, las siguientes etapas y objetivos

- 1] Organizarse y entrenarse en Honduras durante los años 1979, 1980 y 1981, con el apoyo del gobierno y las fuerzas armadas de ese país y bajo la asesoría de la dictadura militar argentina y la CIA.
- 2] Pasar a la ofensiva militar mediante el despliegue de ataques e incursiones en territorio nicaragüense desde fines de 1981 y comienzos de 1982.
- 3] Intentar trasladar los campamentos militares de Honduras al interior de Nicaragua y establecer "zonas liberadas" donde se establecería un gobierno provisional reconocido por Estados Unidos. Esta fase va acompañada de la penetración de "fuerzas de tarea".

A la fecha, aunque se ha superado la forma de lucha de los *contras* —de la fase guerrillera a la de movimientos de tropas—, éstos no han podido, desde 1983, alcanzar el objetivo militar y político de "liberar" una parte del país.

En las acciones de desestabilización de que ha sido objeto el proceso revolucionario, es evidente, por ejemplo, que las más importantes de ellas —como las incursiones aéreas y navales y las acciones comando altamente sofisticadas contra objetivos económicos— no han podido ser realizadas por los *contras* únicamente, sino que en ellas han participado las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus destacamentos de Fuerzas de Operaciones Especiales. Al respecto, las audiencias del Congreso de Estados Unidos realizadas en abril de 1984 comprueban la participación de destacamentos norteamericanos en el minado de los principales puertos nicaragüenses, de igual manera que la información compilada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuyo veredicto de julio de 1986 —que no fue aceptado

34 Americas Watch and the Lawyers Committee for International. Human Rights, *The Human Rights in Nicaragua*, Washington, 1984

35 Jaime Morales Carazo *¡Mejor que Somoza cualquier cosa!*, ed. Continental México, 1986. Este es el libro más completo escrito desde la perspectiva de los *contras*. Se sostiene que tienen 20 mil integrantes.

por el gobierno de Estados Unidos— obligaba a éste a reparar los daños causados.³⁶ En mayo de 1984, el semanario argentino *Siete Días*, en un extenso reportaje sobre las Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, se refería a la forma como una Brigada de Demolición Antisubmarina (BUD) minó el puerto de Corinto, señalando que dichos comandos "participaron en la tarea de minado teniendo como base un barco controlado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que operaba desde las costas del Pacífico de Nicaragua", colocando minas acústicas.³⁷

Aunque los *contras* poseen armamento no muy sofisticado, tienen ya capacidad de enfrentar a la aviación nicaragüense mediante misiles antiaéreos SAM-7, como fue demostrado en diciembre de 1985. No obstante, con la reciente aprobación en el Congreso estadounidense de la ayuda de 100 millones de dólares a los antisandinistas —de los cuales 70 serán para ayuda directamente militar—, muchos de estos fondos se destinarán a armas de mayor capacidad de ataque.

En síntesis, la guerra de defensa que libra Nicaragua tiene efectos dramáticos para el conjunto de la nación. Un reciente informe divulgado por el gobierno sandinista señala que se han librado 3 278 combates entre fuerzas sandinistas y los *contras* entre 1981 y 1985, de los cuales la mitad corresponden a 1985 (1 637 combates). Igualmente se han registrado 641 incursiones navales y 2 809 violaciones del espacio aéreo.³⁸ A nivel humano, las bajas en ambos bandos ascienden a 31 mil personas entre 1981 y el primer semestre de 1986,³⁹ cifra de por sí alarmante, sobre todo si se compara con la cifra de pérdidas humanas durante la lucha antidictatorial de 1978 al 19 de julio de 1979, que se estima en aproximadamente 40 mil personas.

El efecto sobre la población civil es más dramático. En el informe mencionado se ofrecen las siguientes informaciones, que corresponden a las víctimas entre 1981 y el primer semestre de 1985: 2 817 muertos; 3 020 heridos o mutilados; 2 825 secuestrados; 114 mujeres violadas; 6 239 niños huérfanos y 142 980 desplazados de las zonas de combate. A lo anterior se añaden los daños físicos y pérdidas en la producción, que suman 392.9 millones de dólares entre 1981 y 1984.⁴⁰

No obstante lo anterior, la defensa integral de Nicaragua se garantiza mediante la creación

36 El veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya apareció en "El Gallo Ilustrado", *El Día*, México, 20 de julio de 1986.

37 "Los perros de la guerra", *Siete Días*, Buenos Aires, 30 de mayo de 1984.

38 Gobierno de Nicaragua, op. cit.

39 La cifra de más de 30000 bajas en combate para las fuerzas sandinistas y los *contras* fue proporcionado por Daniel Ortega en el discurso en el VII Aniversario de la Revolución, el 19 de julio de 1986. Ver *Excelsior*, México, 20 de julio de 1986.

40 Gobierno de Nicaragua, op. cit

de estructuras cívico-políticas que se integran al esfuerzo militar. Dicha organización, que se basa en las llamadas Milicias Populares, tiene capacidad de armar a 300 mil ciudadanos en caso de una necesidad de movilización masiva: por ejemplo, ante la eventualidad de la invasión de Estados Unidos.

De igual manera, el gobierno sandinista sostiene que la contrarrevolución ha sido incapaz de propinar golpes significativos a la nación nicaragüense, por lo que se habla de una derrota estratégica. Además, no ha podido ocupar posiciones militares ni asentarse políticamente en la población, lo que conforma la imposibilidad de que los *contras* pudieran tener éxito en el mediano y largo plazo.

4. BASES Y MANIOBRAS MILITARES DE ESTADOS UNIDOS EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

A la par de la creación del ejército contrarrevolucionario como punta de lanza de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica, la instalación del complejo militar en Honduras y la realización de maniobras militares en el área cumplen también funciones militares de primer orden para apuntalar la estrategia de contención activa frente a la revolución nicaragüense y al FMLN salvadoreño.

Las bases militares y los aeropuertos en Honduras se articulan a los establecidos en Panamá y Puerto Rico, así como a los comandos destinados a un enfrentamiento en la Cuenca del Caribe, ubicados en el sur de Estados Unidos —Key West, Florida— y en la base de Guantánamo, Cuba. Sin duda, la presencia de las fuerzas antisandinistas, la instalación en Honduras de la infraestructura para la eventual invasión, las misiones de inteligencia y el entrenamiento de las fuerzas aliadas, son el elemento central que provocó la ruptura del equilibrio militar en la región y no —como lo pretende el gobierno Reagan— la creación y fortalecimiento de las estructuras de defensa de Nicaragua.

El Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos, con sede en Panamá, tiene como función militar primordial responsabilizarse de la defensa del flanco sur del territorio norteamericano, y como función política entrenar y adoctrinar a las fuerzas armadas de los distintos países de América Latina. Entre 1950 y 1979 se prepararon 82 965 militares de distinta graduación en la Escuela de las Américas.

El complejo militar del Comando Sur se ubica actualmente en una superficie de 402.12 km² y está compuesto por veintidós bases, guarniciones y estaciones militares: once pertenecen al ejército, siete a la marina de guerra, dos a la fuerza aérea y dos son cuarteles

conjuntos. Para la guerra en Centroamérica, adquieren relevancia las labores de inteligencia militar y las funciones de la Brigada de Infantería 193, instaladas en Fort Clayton.⁴¹

Consideración importante debe hacerse sobre esta última, pues es la fuerza central del Comando Sur y está directamente articulada a uno de los destacamentos de las fuerzas centrales del ejército de Estados Unidos, con sede en Fort McPherson, Georgia. Una de sus principales funciones es el entrenamiento para la guerra en la selva, para la cual se cuenta con destacamentos de Fuerzas Especiales. Actualmente se le ha asignado la responsabilidad del entrenamiento de Fuerzas Especiales en los ejercicios militares realizados en Honduras, y de ella han partido comandos para el minado de los puertos nicaragüenses.

La función del complejo militar existente en Puerto Rico es la de contar con una base alterna de submarinos en caso de una conflagración nuclear (Roosevelt Roads).⁴² Por otra parte, a nivel regional, desde los últimos años de la década del setenta, la Guardia Nacional de Puerto Rico ha participado en la asesoría a las fuerzas policiales del Caribe Oriental y actuó en la invasión de Granada en octubre de 1983. Constantemente se envían destacamentos de ella a las maniobras militares en Honduras. En aguas puertorriqueñas se realizan anualmente los importantes ejercicios conocidos como Ocean Venture, los cuales se basan en el entrenamiento en tácticas de desembarco de contingentes de Fuerzas de Despliegue Rápido, que se utilizarían en caso de decidirse la intervención militar directa.

El complejo militar estadounidense en Honduras, que ha adquirido un status permanente, tiene como funciones principales: 1] la eventualidad del conflicto militar con Nicaragua, ya sea en apoyo al ejército hondureño en un conflicto interestatal o participando directamente; y 2] proporcionar apoyo en entrenamiento e inteligencia militar al ejército salvadoreño, además de tener lista la infraestructura necesaria en caso de tomar la decisión de enfrentar al FMLN debido a la eventual ineficiencia del ejército salvadoreño en su esfuerzo contrainsurgente. El elemento jurídicoformal para dar pie a la entrada de los destacamentos militares, construir las bases y aeropuertos y realizar las maniobras es la renovación del convenio establecido entre Estados Unidos y Honduras en 1954.⁴³ Conocido como "Anexo al Convenio Bilateral de Ayuda Militar entre el Gobierno de Honduras y el de los Estados Unidos de América" y firmado el 7 de mayo de 1982, el documento señala en sus partes medulares que "según

41 Ver Raúl Leiss, *El Comando Sur en Panamá. Enclave Militar Contrainsurgente*, Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA), marzo de 1985; y Gregorio Selser, "Las bases de Estados Unidos en Panamá. El Destino del Comando Sur y de la Escuela de las Américas", *Nueva Sociedad*, Caracas, nov.-dic. de 1982, n. 63

42 Jorge Rodríguez Beruff, "Puerto Rico y la militarización del Caribe: 1979-1984", en *Estados Unidos. Perspectiva Latinoamericana, Cuadernos Semestrales*, n. 15, CIDE, México, primer semestre, 1984.

43 *Tiempo*, Tegucigalpa, 16 de julio de 1983

acuerdo entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y de Honduras, Estados Unidos emprenderá un programa para el mejoramiento de las instalaciones existentes en caso de tomar la decisión de enfrentar al FMLN debido Mesa y de cualquier otro aeropuerto que posteriormente acuerden ambos gobiernos". Con esta disposición, Estados Unidos logra significativos avances en el terreno del despliegue militar de sus fuerzas en la región, al conseguir que el territorio hondureño sea la base de tres ejércitos: el propio hondureño, el norteamericano y el de los *contras*. Debemos considerar, además, que el ejército norteamericano es el de más alta capacidad combativa en la región.

En Honduras, el cuartel general de las tropas norteamericanas se encuentra en Palmerola, en el centro del país. Se terminó de instalar durante las maniobras Pino Grande III, efectuadas en agosto de 1983, y cuenta con 1 200 efectivos permanentes (900 pertenecientes a servicios del cuartel y 300 al Batallón 224 de Inteligencia Militar). Está también el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), en Puerto Castilla, donde se entrenan soldados hondureños (no se pudo concretar el entrenamiento del ejército salvadoreño por problemas surgidos en 1969 a raíz de la guerra entre El Salvador-Honduras). Igualmente se han construido o remodelado once aeropuertos —convirtiendo a Honduras en la porción del territorio latinoamericano con mayor densidad de aeropuertos por km²— así como dos estaciones de radar: una en el Golfo de Fonseca y otra en el cerro La Mole. Esta infraestructura militar se construyó al abrigo de la realización de las maniobras militares, para que no tuviera que pedirse autorización al Congreso por motivos presupuestales, incorporándose sus costos al presupuesto ordinario del Pentágono. Numerosos analistas coinciden en afirmar que desde abril de 1984 Estados Unidos tiene capacidad para desplegar aproximadamente 15 mil soldados en el lapso de una tarde⁴⁴ si decidiera recurrir a la intervención militar como opción, sea frente al gobierno de Nicaragua o frente al FMLN. El 2 de febrero de 1984, uno de los opositores al presidente Reagan en el Congreso, Gerry Studds, señaló que "las actividades militares a gran escala en Honduras han sido descritas como maniobras, pero en realidad se han convertido en el despliegue semipermanente de tropas de combate norteamericanas".

A partir de 1983 —desde la maniobra Pino Grande I, realizada del 1 al 6 de febrero de ese año—, se estima que hay una presencia permanente de más de mil efectivos estadounidenses en Honduras. El número de personal destinado específicamente en la realización de maniobras —al que debe añadirse la presencia de las tropas permanentes en Palmerola, Puerto Castilla, los aeropuertos y los radares— ha oscilado entre un mínimo de ochocientos (marzo-abril de 1984) y un máximo de 5 500 (agosto-diciembre de 1983). El Pentágono

44 *Time*, 2 de abril de 1984

reconoció oficialmente que durante el ejercicio Pino Grande II participaron 5 125 efectivos norteamericanos. Al respecto, el gobierno Reagan argumenta que este personal no es permanente, sino temporal, destinado a la realización, precisamente, de los ejercicios. Sin embargo, la "temporalidad" de dicho personal es igualmente peligrosa, si tomamos en cuenta que, según diversos cálculos, aproximadamente 80 mil soldados norteamericanos se han aclimatado y entrenado para la eventualidad de la intervención militar en dichos ejercicios terrestres y navales. A ello hay que agregar que la mayoría de las hipótesis de guerra conforme a las cuales se realizan las maniobras tienen un carácter abiertamente intervencionista.

5. CONCLUSIONES

¿Por qué afirmamos que, desde el punto de vista del gobierno Reagan, la guerra de Baja Intensidad es la opción asumida como solución de mediano y largo plazo al conflicto centroamericano? Hasta el año de 1983, la política estadounidense hacia Nicaragua se sostenía en dos pilares: o la intervención o la negociación. La intervención no se lleva a cabo por los enormes costos que implica. La segunda opción tampoco pues, en el esquema del gobierno negociar implica ceder a los objetivos del enemigo. Es más, sólo sería viable negociar si las llamadas "fuerzas enemigas" avanzan al grado de amenazar la estabilidad del aliado y si no se decide intervenir (esquema aplicable al caso salvadoreño). Frente a Nicaragua, y dado que no hay nada que negociar para Estados Unidos, ninguna de las dos opciones es viable para la política norteamericana.

Como ya lo señalamos, el año de 1984 implica el cambio de percepción estratégica sobre el rumbo y la dirección del conflicto. En ese año se realizan los "diálogos de Manzanillo" entre los dos gobiernos. Estados Unidos accede a dialogar en la ciudad de Manzanillo, México, como una maniobra electoral de Reagan, quien buscaba su reelección, y suspende las conversaciones a principios de 1985. En 1984, numerosos documentos elaborados por altos personeros del gobierno y por los llamados *think tanks* (centros académicos que elaboran políticas y opciones para el gobierno) coinciden en la noción de contención activa sin negociación y sin intervención militar.

El *Informe Kissinger* y el documento elaborado por la Fundación Heritage, titulado *Mandato para un Segundo Liderazgo*, dan cuenta de ello. Sin embargo, el 28 de noviembre de 1984, el propio Secretario de Defensa, Caspar Weinberger, en discurso titulado *Los usos del poder militar*, habla de las razones para no intervenir directamente en los conflictos en

el Tercer Mundo. Primero, Estados Unidos no debe enviar tropas al extranjero salvo que sea estrictamente de interés vital para su seguridad. Segundo, si se mandan tropas, deben ir con la firme intención de ganar. Tercero, para enviar tropas deben estar perfectamente definidos los objetivos militares y políticos a alcanzar. Cuarto, la relación entre los objetivos norteamericanos y las fuerzas comprometidas debe ser constantemente revaluada y ajustada, si fuera necesario. Quinto, antes de que Estados Unidos comprometa unidades de combate en el extranjero se debe tener la certeza de que se cuenta con el apoyo del pueblo y Congreso norteamericanos. Sexto, el comprometimiento de la fuerza norteamericana no debe ser decidido excepto en la última instancia.

En el caso nicaragüense, es evidente que en realidad no se amenazan los intereses vitales de Estados Unidos, ni económicos ni de seguridad. Además, no se garantizaría el éxito militar de las tropas de ese país. Por otro lado, los objetivos militares y políticos se desconcentran en el territorio y el pueblo de Nicaragua, dado que la doctrina de defensa del actual Estado sandinista diluye la responsabilidad no sólo en el Ejército Popular Sandinista, sino también en el pueblo a través de las Milicias Populares, por lo que masifica los objetivos militares de Estados Unidos ante la eventual invasión. Ante ello, el conflicto se encontraría en una espiral bélica ascendente, con muy pocas posibilidades de éxito y, si se invade, el consenso a la actual política de Reagan se puede debilitar ante la opinión pública y la oposición demócrata. Si se asume que la invasión se tomaría como opción de última instancia, ¿cuál sería el límite para intervenir frente a Nicaragua? Sólo la eventualidad de que ésta invada a un país vecino o agreda algún objetivo norteamericano haría al gobierno tomar esa decisión. A las dificultades anteriores habría que añadir que los sucesos que motivaron la intervención en Granada —principalmente la fractura del grupo gobernante— no son viables en el caso nicaragüense, pues en Granada las fuerzas de defensa eran prácticamente inexistentes, mientras que el sistema defensivo de Nicaragua está consolidado en sus estructuras profesionales e irregulares. Por ello, el temor de ataques similares al realizado contra Libia son una de las opciones posibles para hostigar al gobierno de Nicaragua.

Todo lo anterior perfila a la política norteamericana en base al rechazo tanto de la negociación —cuya propuesta más acabada es el Acta de Paz del Grupo de Contadora— como de la intervención militar directa, siendo la guerra prolongada de baja intensidad el recurso político de Estados Unidos frente a Nicaragua y Centroamérica en el corto y mediano plazo.